

CCB0439

CCB-SALITRE



07372

# Bogotá en la nueva Constitución

Biblioteca - CIEB.

No. Inventario Nº 7372Fecha Ingreso 21/10/96  
DIA MES AÑOPrecio \$ 2000 No. Ejemplares       

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
Calle de la Real 100 - Bogotá  
Calle de la Real 100 - Bogotá  
CIEB  
BIBLIOTECA

*Comentarios de Mario Suárez Melo, presidente de la  
Cámara de Comercio de Bogotá, al texto aprobado en  
la Comisión 2ª de la Asamblea Constitucional.*

DE COMERCIO  
BOGOTÁ  
CCB0439



07372

Bogotá, D.E., mayo 22 de 1991



# Bogotá en la nueva Constitución

Pág.

- La Comisión 2ª introdujo 8 modificaciones importantes a la ponencia inicial del constituyente Jaime Castro, evitando oportunamente el "limbo jurídico total" en que habría quedado la ciudad a partir del 5 de julio. 2
- El cambio de denominación de Distrito Especial a Distrito Capital es, simplemente, un cambio de nombre con repercusión electoral. 3 - 4
- La fórmula aprobada de la Comisión 2ª puede llevar a la separación de Bogotá y Cundinamarca. 4 - 5
- Al Distrito Capital se le aplicará el régimen municipal ordinario en todo lo no previsto en el régimen especial - Las falsas críticas al Distrito Especial - Bogotá no es "ciudad única". 5 - 6
- Se rompe la unidad política y administrativa para el manejo del Distrito. 6 - 7
- Se feudaliza a Bogotá en vez de integrarla. 7
- La pulverización de la autoridad compromete la gobernabilidad de la ciudad. 7
- El criterio de "anexión" o "incorporación" de municipios vecinos debe desecharse para dar paso a fórmulas de asociación. 8
- ¿A través del "Distrito Metropolitano" se pretende crear otro departamento o se trata solamente de otro cambio de nombre? 8 - 9
- Se reduce la participación de los usuarios de los servicios públicos. 9 - 10
- Siete conclusiones sobre el nuevo régimen jurídico de Bogotá. 10 - 11





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

Bogotá, D.E.,

Señores  
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA  
NACIONAL CONSTITUYENTE  
E. S. D.

BIBLIOTECA

Señores Delegatarios:

La prensa del pasado 14 de mayo informó sobre la aprobación que la Comisión 2a de la Asamblea Constitucional dió al nuevo régimen de Bogotá, organizándola bajo la denominación de "Distrito Capital", retomando, en buena hora, el nombre histórico de SANTAFE y señalando las orientaciones generales para su administración y manejo.

La Cámara de Comercio, desde hace varios años ha venido colaborando, por razón de sus actividades cívicas, en el estudio y análisis de los problemas de la capital de la República y ha acumulado materiales, documentos y criterios al respecto. Igualmente, ha organizado foros sobre estas mismas cuestiones y sobre los temas que está actualmente examinando esa Asamblea, justamente para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y los Constituyentes tengan una oportunidad adicional de confrontar sus iniciativas con las reacciones que van generando las propuestas que se discuten. Este es, a nuestro juicio, un intercambio conveniente y el ejercicio de un derecho ciudadano que contribuirá, en alguna medida, al diseño acertado de la nueva Constitución.

En desarrollo de lo anterior, ponemos respetuosamente a la consideración de la Asamblea constitucional algunas opiniones sobre los 7 artículos aprobados por la Comisión 2a, sobre el régimen que tendrá Bogotá en la nueva Constitución.

En primer término debe afirmarse categóricamente que los textos aprobados en la Comisión, significan un considerable avance en relación con la propuesta inicial del Constituyente Jaime Castro; con buen juicio se han modificado puntos de vista y se han llenado vacíos que de no haber sido corregidos, habrían creado graves dificultades en el manejo futuro de la ciudad. En efecto, la Comisión ha mejorado notoriamente el proyecto inicial, principalmente, en los siguientes 8 aspectos:

1.- Definió el régimen jurídico aplicable a Bogotá en forma directa y





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

2

precisa, al establecer que lo configuran, en su orden, las normas constitucionales, las leyes dictadas especialmente para la ciudad, y las disposiciones vigentes para los demás municipios del país, cuestión vital que el proyecto inicial dejaba a la determinación de una futura ley, que de no expedirse inmediatamente habría dejado a Bogotá el 5 de julio sin régimen jurídico que le fuera aplicable;

- 2.- Sujetó a los criterios que señale la ley la competencia del Concejo para organizar las nuevas "localidades", solución mejor concebida que la del proyecto original en el cual era la misma ley la que creaba nuevas subdivisiones territoriales;
- 3.- Hizó optativa la elección popular de los alcaldes de esas "localidades", pues permite ahora que la ley determine que su nombramiento corresponda al Alcalde Mayor, alternativa que reconoce implícitamente la conveniencia de evaluar la fórmula antes de proceder a su inmediata aplicación;
- 4.- Eliminó la posibilidad de que todos los parlamentarios del país intervinieran a través de una ley en el señalamiento del porcentaje mínimo del presupuesto distrital que debía ser distribuido entre las "localidades", que es un aspecto de administración interna del Distrito, trasladando esa facultad, como era lógico, al Concejo Distrital.
- 5.- Excluyó la posibilidad de que los municipios circunvecinos pudieran entrar y salir, según sus conveniencias, del Distrito, eliminando así el peligro de que un municipio "incorporado" después de obtener las inversiones distritales, se retirara a voluntad en el momento de participar en el pago de las mismas;
- 6.- Dio jerarquía constitucional a la participación de los usuarios de los servicios públicos en las juntas directivas de las empresas públicas, circunstancia que había sido ignorada en el proyecto inicial.
- 7.- Señaló la base de población para elegir concejales, impidiendo el crecimiento desmedido de esa Corporación y
- 8.- Autorizó al Gobierno para expedir el estatuto especial para Bogotá, en el caso de que el Congreso no lo haga dentro de los 120 días siguientes a la promulgación de la nueva Constitución, situación que a pesar de su trascendencia, no estaba prevista en el proyecto inicial.

No obstante las modificaciones anotadas, aún subsisten seis aspectos principales que podrían ser precisados o modificados a fin de lograr un régimen más acorde con las necesidades y realidades de Bogotá. Estos aspectos son, a nuestro juicio, los relacionados con: 1) la necesidad de





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

3

precisar la noción de "Distrito Capital"; 2) el régimen jurídico del Distrito Capital; 3) el fraccionamiento de la unidad distrital; 4) la indefinición de la composición territorial del Distrito Capital; 5) el Distrito Metropolitano; 6) la reducción de la participación comunitaria.

Los comentarios sobre cada uno de estos puntos son los siguientes:

## 1.- Necesidad de precisar la noción de "Distrito Capital"

La denominación que finalmente se ha adoptado para distinguir a Bogotá ha quedado reducida, simplemente, a una cuestión de nombres, escogiendo el más sonoro de "Distrito Capital", que ha sido utilizado antes como bandera política y que seguramente se usará con el mismo propósito en eventuales campañas futuras. Empero, es preciso examinar los factores históricos y jurídicos que comporta esta denominación:

- a) "Distrito Capital" es un concepto que tiene un significado histórico y jurídico en Colombia, conforme a la experiencia de 1905, rechazada en 1945, por ser considerada -entonces- como incompatible con el régimen unitario y con los servicios que debía atender la capital.

El derecho comparado muestra que es en los regímenes federalistas, más no en los unitarios, donde existen la necesidad y conveniencia de establecer un status singular a la ciudad que sirve de sede a los poderes nacionales, para darle sede propia y gobierno autónomo frente a los estados federados. Las fórmulas Distrito "Federal" o "Capital" en la teoría constitucional implican que las respectivas entidades no hacen parte de ninguna otra entidad territorial y que son gobernadas por el legislativo y el ejecutivo nacionales y no por sus ciudadanos. Los atributos municipales y la participación democrática desaparecen en este esquema para dejar que la "sede del gobierno nacional" sea administrada y manejada por los poderes centrales.

Resulta, pues, sorprendente que ésta sea la concepción general dentro de la cual se proyecte la organización de Bogotá, estructurándola como "Distrito Capital", cuando justamente la evolución de las ciudades capitales federales ha sido la de avanzar hacia el régimen municipal, con autoridades elegidas y no bajo el gobierno del poder central, esto es, hacia un gobierno propio y autónomo.

La contradicción de la fórmula propuesta se reconocía implícitamente en la ponencia inicial. Por ello, al tiempo que





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

4

se proponía el "Distrito Capital" sin explicar su alcance y significado, a lo largo del proyecto se introducían disposiciones que contrariaban las consecuencias que en derecho se derivan de tal noción. Por ello, en el texto aprobado, conforme lo exige la democracia moderna, se estipula la elección popular de las autoridades distritales, dándose al "Distrito Capital" un contenido igual al que actualmente tiene la categoría jurídica de Distrito Especial, confirmando que se trata, como antes se afirmó, de un simple cambio de nombre.

- b) La fórmula del Distrito Capital puede crear un innecesario conflicto con el Departamento de Cundinamarca.

Así ha sido históricamente tanto en 1905 como en 1945, por la separación entre Bogotá y Cundinamarca que esta denominación implica. Justamente, para evitarla, surgió la idea del Distrito Especial, que permitía modernizar el estatuto de la capital sin segregarla de Cundinamarca.

A diferencia de lo que hoy ocurre, en que Bogotá es un municipio de Cundinamarca según el art. 5 de la Constitución, el proyecto aprobado el 13 de mayo no contempla expresamente la no separación de estas dos entidades territoriales. Si bien en la parte final del artículo 4 propuesto se mantiene la disposición de que Bogotá participará en las rentas departamentales en la proporción que determine la ley, lo que hace suponer que es parte del territorio departamental, este punto que ha sido conflictivo a lo largo del siglo, merece mayor claridad. De no hacerse tal precisión en el texto, se deja abierta la posibilidad de que la interpretación histórica conduzca a la segregación, pues éste fue el significado jurídico de esta misma denominación en 1905, bajo el gobierno del General Reyes.

El proyecto, como se ha mencionado, no sólo no precisa si Bogotá seguirá siendo parte de Cundinamarca sino que, al señalar las relaciones entre el Departamento y el Distrito, deja planteados algunos factores que generarán dudas futuras. En efecto:

b1.- No se menciona en el articulado que Bogotá es la capital del Departamento.

b2.- De otra parte, cuando el proyecto establece la posibilidad de que el Distrito se asocie con los municipios circunvecinos para conformar un "Distrito Metropolitano" y con otras entidades territoriales para crear una región, no se prevé que Cundinamarca, el entorno natural de la ciudad, tenga participación en dicho





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

5

proceso, como si el Departamento fuera a desaparecer. No parece propio que se guarde silencio en un aspecto tan importante, al menos mientras el actual Departamento exista.

b3.- Igualmente, y a pesar de tratarse de un tema territorial de importancia, tampoco está prevista la intervención del Departamento de Cundinamarca en el caso de que algunos municipios circunvecinos decidan incorporarse al "Distrito Capital", lo cual afecta, sin duda, su configuración departamental.

En síntesis, si en realidad no se pretende la separación de Bogotá y Cundinamarca, debe complementarse la redacción de los artículos propuestos para que los vacíos anotados no abran la puerta en el futuro a una interpretación histórica derivada de la figura "Distrito Capital" que implica, como ya lo vimos, unas consecuencias específicas que es preciso contrarrestar en la redacción de los textos propuestos.

## 2.- El régimen jurídico del Distrito Capital

En el artículo 1o. del texto ya aprobado por la Comisión se declara que el régimen político, administrativo y fiscal del Distrito Capital será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que se dicten para la ciudad y las normas vigentes para los municipios.

Es decir, jurídicamente es lo mismo que hoy existe bajo la figura del "Distrito Especial". Con ésto se descartan las críticas ligeras que se hicieron a la categoría jurídica del Distrito Especial.

Se rectifica así el sentido de la ponencia inicial que atacaba la figura del "Distrito Especial", atribuyéndole fallas que, en realidad, no son atribuibles ni a la incapacidad de los constituyentes de 1945, ni a deficiencias jurídicas de sus términos, sino precisamente a la idea, que la propuesta inicial consagraba, de enmarcar a Bogotá como ciudad única, reclamando, por "cuestión de status", derecho a competencias y mecanismos especiales y diferentes, sin ninguna relación con las normas que regulan la vida de los demás municipios.

Es bueno que la reforma constitucional parta de consideraciones jurídicas válidas, y no de un supuesto agotamiento de figuras que pueden ser todavía útiles, o de interpretaciones que no corresponden al sereno análisis jurídico.

La redacción adoptada ahora por la Comisión 2a. de la Asamblea aprovecha la experiencia del Distrito Especial y evita que se caiga en el "limbo jurídico" total, al que llevaba el proyecto del Constituyente





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

6

Jaime Castro, que no contemplaba la aplicación al Distrito Capital de las normas del régimen municipal ordinario en todo aquello que no estuviera previsto en el estatuto especial que la ley debía establecer.

El criterio adoptado ahora rectifica la idea de Bogotá como "ciudad única", de régimen jurídico singular por virtud de su "status", como si la condición municipal fuera degradante. No lo es, ciertamente, y menos en un momento en que el movimiento municipalista representa la tesis de la democracia local, de la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos de su comunidad. Esta evolución puede apreciarse en las grandes capitales latinoamericanas (México, Buenos Aires, Brasilia), que vienen pasando de la situación de "ciudades capitales", gobernadas por el poder central (legislativo y ejecutivo), a una situación más municipal, en la que se ha transformado su organización para asimilarse en mayor grado a los otros municipios, sin dejar su condición de sedes de los poderes nacionales.

El mismo proceso viene ocurriendo en Colombia, donde la reforma constitucional de 1986 extendió a Bogotá las disposiciones sobre la elección de alcaldes y de otras normas concebidas para los municipios ordinarios, guardando la identidad sociológica y jurídica que entre ellos existe.

Por último, debe recordarse que este sometimiento al régimen municipal ordinario, hecho de manera supletoria cuando no exista norma en los preceptos especiales sobre el Distrito Capital, es el mismo que introdujo para el Distrito Especial la ley 8a. de 1991, justamente para superar los vacíos que, en mala hora, resultaron de la elaboración e interpretación de la ley 11 de 1986.

### 3.- El fraccionamiento de la unidad distrital

En este aspecto, el proyecto aprobado por la Comisión 2a. mejora, como ya se anotó, algunas iniciativas anteriores del delegatario doctor Jaime Castro, pero subsisten algunos aspectos a nuestro juicio inconvenientes, que deben analizarse cuidadosamente. Ellos son:

a) Se crean, como subdivisiones de Bogotá, localidades territoriales con concejales y alcaldes locales, elegidos por votación popular. Atenuando lo anterior, se prevé que la ley pueda disponer el nombramiento de alcaldes locales por el Alcalde Mayor, de terna enviada por el correspondiente concejo local.

Aunque ya se corrigió la participación de los presidentes de los concejos locales en el distrital, debe insistirse en los peligros que para la necesaria coordinación y el buen desenvolvimiento gubernamental tiene





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

7

la subdivisión político-administrativa de la ciudad capital.

Sin perjuicio de mantener y estimular un esquema de desconcentración, necesario para facilitar y mejorar el manejo de la ciudad, resulta totalmente inconveniente la propuesta de desvertebrar el gobierno de Bogotá, permitiendo que cada zona tenga una administración autónoma que puede no estar de acuerdo con la política general del Concejo Distrital y el Alcalde Mayor. La gobernabilidad de la ciudad dentro de esta concepción se vería seriamente comprometida y la administración distrital perdería su capacidad de acción. Feudalizar a Bogotá, en vez de integrarla, no parece una buena fórmula descentralista.

Esta feudalización en el manejo de la ciudad se aumenta por el hecho de que según el texto aprobado, en adelante los alcaldes de las "localidades" y no el ALCALDE MAYOR, elegirán dos miembros de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos. En otras palabras, el Alcalde Mayor ya no tendrá ni el manejo de las localidades en que estará subdividido el Distrito ni el manejo de las Juntas Directivas de las empresas públicas. ¿Cómo entonces, podrá responder el Alcalde Mayor por el manejo de Bogotá...?

Este a nuestro juicio es el punto más importante en la organización futura de la ciudad y no puede desviarse su discusión argumentando que observaciones similares se hicieron cuando se propuso la elección popular de alcaldes para todos los municipios del país, pues entonces se trataba de dar autonomía a los municipios como unidades administrativas básicas frente a los Departamentos y ahora se trata de fraccionar el gobierno de una de estas unidades básicas. Si esta mal entendida descentralización del gobierno de una ciudad no tiene límites, entonces ¿porqué no elegir también popularmente autoridades para cada barrio y, exagerando, para cada sector de cada barrio? Si la premisa de la que se parte consiste en que entre más se fraccione el poder hay una mayor aproximación al ideal democrático de gobierno, ¿cuál es el límite que debe tener dicho fraccionamiento de la autoridad? y, además, ¿por qué esta subdivisión del gobierno de una ciudad grande no se extiende a otras ciudades como Medellín o Cali, que también están conformadas por zonas homogéneas perfectamente diferenciables entre sí?

Esta pulverización de la autoridad, junto con el fraccionamiento territorial interno, puede resultar atractiva políticamente a quienes aspiren a apoderarse de las nuevas localidades y a negociar de "poder a poder" con el Alcalde Mayor, politizando aún más la vida de Bogotá, pero acarreará dificultades insalvables para el buen gobierno de la capital del país, o dicho más claramente, hará imposible el gobierno





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

8

de la ciudad.

## c) Composición del Concejo

Aunque es conveniente, como ya se anotó, dejar abierta la puerta para que la ley determine el número de miembros que tendrá el Concejo Distrital, según las bases de población señaladas en el texto aprobado, resultaría necesario, además, como se había propuesto en algunos proyectos, dejar a la ley la posibilidad de señalar condiciones especiales para la elección de concejales, dentro de las cuales podría establecerse la elección por zonas urbanas o círculos electorales para un número determinado de concejales, siendo los otros elegidos por toda la ciudad, logrando aumentar la descentralización sin el fraccionamiento que la creación de las "localidades" implica.

## 4.- La indefinición en la composición territorial del Distrito Capital

Debe comentarse, igualmente, la posibilidad que abre el proyecto de la Comisión 2a. de que municipios circunvecinos se incorporen al Distrito Capital, mediante votación ciudadana y aceptación del Concejo Distrital. Por fortuna, como antes se anotó, se suprimió la fórmula contemplada en la propuesta inicial del Constituyente Jaime Castro de que cuando así lo decidiera la mayoría de sus ciudadanos en votación pública, pudieran estos municipios incorporados retirarse del Distrito, entrando y saliendo a voluntad, según las conveniencias de cada momento.

Este esquema de incorporación aún resulta inapropiado por dos razones: la primera, porque la extensión del Distrito Capital y la del Departamento podrían estar variando permanentemente, lo cual no resulta deseable y la segunda, porque la anexión o incorporación es una fórmula superada por la posibilidad de las áreas metropolitanas, adoptada desde 1968. Mediante esta última, una gran capital y los municipios vecinos se pueden asociar para fines de administración, planificación y de servicios, sin que los municipios que se asocian pierdan individualidad y su carácter de personas jurídicas. Esta alternativa es mejor y en ella debería pensarse, más que en repetir en cierta manera la experiencia de 1954 que dejó la sensación de comunidades absorbidas por la gran ciudad.

## 5.- El Distrito Metropolitano

A los factores ya examinados puede añadirse la configuración de lo que podría llamarse Bogotá hacia afuera. Precisamente en concordancia con lo expresado en el punto anterior, el artículo 6o de la propuesta aprobada en la Comisión 2a prevé que el Distrito





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

9

Capital pueda conformar un "Distrito Metropolitano" con los municipios circunvecinos y una "Región" con otras entidades territoriales, en un esquema de asociación y no de incorporación.

Los fines de este "Distrito Metropolitano" son garantizar la ejecución de los planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo. En otras palabras, la innovación propuesta se reduce a otro cambio de nombre para la misma figura del área metropolitana tal como está concebida en el art. 198 de la Constitución actual, y tal como opera hoy alrededor de Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. En cambio, el área metropolitana de Bogotá no fue organizada oportunamente, con grave daño para la sabana y sus municipios, que quedaron expuestos a la invasión desordenada de la capital, por la interpretación errada de que a Bogotá no le era aplicable la legislación de los otros municipios.

Pero si éste no fuera el alcance del llamado "Distrito Metropolitano" y se tratara de una nueva entidad territorial, se estaría abriendo la posibilidad de crear -en la práctica- un nuevo departamento, en desmedro de la organización territorial anterior; estaría naciendo un nuevo Departamento dentro de Cundinamarca, que comprendería los territorios de los municipios sabaneros dejando para éste las zonas de vertiente. Que este nuevo fraccionamiento de la organización territorial sea conveniente o no es cuestión que debe decidirse de manera general y no establecer un cambio tan importante a través de una fórmula asociativa cuyo alcance exacto no se precisa en el texto comentado.

## 6.- Reducción de la participación comunitaria

Si bien el texto consagra a nivel constitucional la participación de los usuarios de los servicios públicos en las Juntas Directivas de las empresas que los prestan, y esto resulta conveniente, como ya se anotó, la forma como está redactado implica una disminución de dicha participación, contrariando el espíritu de toda la reforma constitucional que pretende ampliar la participación ciudadana en todos los niveles de decisión.

En efecto, según la Ley 11 de 1986 y el Decreto Ley 1333 de 1986, aplicables hoy a Bogotá en virtud de la Ley 8a. de 1991, la participación que tienen los usuarios en dichas juntas directivas es hoy equivalente a una tercera parte de los miembros que las forman. En cambio, el proyecto les da derecho a nombrar dos representantes, con lo cual, si los respectivos estatutos de las empresas públicas así lo disponen, el número total de los miembros de estas juntas puede ser de 9 ó de 12 ó más, quedando limitada constitucionalmente





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

10

la participación de los usuarios a dos puestos, con lo cual disminuye proporcionalmente el poder de decisión que hoy les corresponde.

## 7.- Conclusiones

Como resumen de lo hasta aquí expuesto, podemos afirmar:

- a) La modernización del régimen de Bogotá, que es necesaria y conveniente, no debe hacerse sobre la base de que la ciudad tiene derecho a un "status" especial diferente a todos los demás municipios del país, por ser la sede de los poderes nacionales, sino en función de los caracteres sociológicos de la ciudad; de su condición de metrópoli; de la magnitud que deben tener su administración y el alcance de sus servicios; de su importancia política, económica y cultural, todo sin olvidar su condición jurídica de municipio.
- b) Si bien se mantiene el nombre de Distrito Capital, los cambios introducidos a la propuesta inicial, particularmente por la aplicación supletoria del derecho municipal a Bogotá, hacen que ésta no vaya a tener propiamente el régimen de algunas capitales de los países federales sino el del Distrito Especial de Bogotá. Así, la denominación de "Distrito Capital" queda reducido a un simple cambio de nombre, que puede ser utilizado en el futuro como bandera electoral pero que conlleva el peligro de originar interpretaciones jurídicas equivocadas, fundadas en lo que significó el "Distrito Capital" en 1905 durante el gobierno del general Rafael Reyes.
- c) Debe quedar claro en la nueva Constitución si Bogotá hace parte del Departamento de Cundinamarca o si se separa de él. Este derecho a la claridad, si así se puede denominar, lo tienen todos los ciudadanos, las autoridades que deben aplicar las normas y los propios habitantes del Departamento, del cual la ciudad ha sido centro geográfico e histórico.

Es indispensable evitar los conflictos que surgirían de la segregación del Departamento de Cundinamarca y por eso, si Bogotá sigue siendo su capital y participa en sus rentas, debe quedar expresamente consignado que hace parte de su territorio, sin perjuicio de la autonomía administrativa de la ciudad y de la separación electoral que están contemplados en la propuesta gubernamental sobre el Distrito Especial.

- d) La subdivisión interna de la ciudad en "localidades" con autoridades propias elegidas por el voto popular, puede desvertebrar la acción administrativa del concejo Distrital y del Alcalde Mayor, en forma





# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO

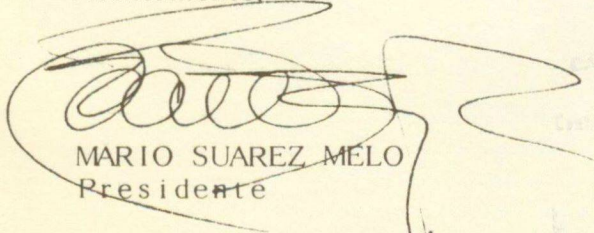
11

inconveniente. Bogotá se convertiría en una ciudad inmanejable a través del fraccionamiento de la unidad distrital, que va a estimular la feudalización de gobierno y a estimular la politización de su administración.

- e) La posibilidad de que otros municipios circunvecinos se incorporen como "localidades" al Distrito Capital puede repetir la desafortunada experiencia de la anexión al Distrito Especial de Fontibón, Usme, Engativá, Usaquén, Bosa y Suba, con perjuicio para todos, existiendo ya formulas de asociación como las áreas metropolitanas sobre las cuales ya hay aplicaciones concretas que han resultado convenientes.
- f) Si la figura del "Distrito Metropolitano" para cuya integración con otros municipios quedaría autorizado el Distrito Capital, implica la conformación de nuevas entidades territoriales independientes del Departamento, se estarían segregando de Cundinamarca los mejores territorios para pasarlos a la ciudad, con desconocimiento de las formulas asociativas ya experimentadas, como el área metropolitana, que permiten la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación de servicios comunes pero sin que los municipios pierdan su identidad municipal.
- g) El proyecto consagra la participación de los usuarios en el manejo de los servicios públicos, que ahora tendrá que cumplirse sin nuevos pretextos ni dilaciones, pero -simultáneamente- la disminuye de una tercera parte del total de los miembros de las respectivas juntas directivas, a dos miembros, con lo cual en juntas de 9 o más miembros, los usuarios perderán poder de decisión, en relación con lo que está hoy establecido.

Reconociendo el buen propósito de modernizar el estatuto de Bogotá que anima a la Comisión 2a. de la Asamblea Constitucional, sugerimos respetuosamente una nueva reflexión sobre el mismo en las deliberaciones de la plenaria, con fundamento en los comentarios aquí consignados que se agregan a otras importantes opiniones que han expresado voceros del Gobierno Nacional, Departamental y Distrital, escritores, editorialistas y estudiosos de Bogotá, inspiradas todas en la conveniencia de darle a Bogotá una estructura que permita su desarrollo futuro.

Atentamente,



MARIO SUAREZ MELO  
Presidente

BIBLIOTEC







[illegible]